

REPÚBLICA DE COLOMBIA**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA**

Santiago de Cali, veintiuno (21) de febrero de dos mil veinte (2020).

Auto interlocutorio: No. 47
Expediente: No. 76001-33-33-002-2013-00080-01
Demandante: POLLOS BUCANERO S.A.
Demandado: DIAN
Medio de control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO EL DERECHO
Asunto: Acuerdo conciliatorio en materia tributaria.

MAGISTRADO PONENTE: EDUARDO ANTONIO LUBO BARROS

Estando el presente proceso a despacho para fallo, presentan las partes demandante y demandada acuerdo conciliatorio suscrito entre las mismas, conforme al beneficio tributario contenido en el artículo 100 de la Ley 1943 de 2018 y el Decreto 872 del 20 de mayo de 2019.

ANTECEDENTES PROCESALES

El 28 de junio de 2013, la sociedad POLLOS BUCANERO S.A., a través de apoderado judicial, interpuso el medio de control consagrado en el artículo 138 CPACA, con el fin de obtener la nulidad de las Resoluciones Nos. 052412012000027 del 6 de marzo de 2012 y 052362013000004 del 14 de marzo de 2013, por las cuales se le sanciona por devolución y/o compensación improcedente emanada del impuesto a las ventas del primer periodo del año gravable 2007.

Surtido el trámite de primera instancia, el a-quo profirió sentencia declarando la nulidad de los actos acusados, decisión contra la cual la parte demandada interpuso recurso de apelación.

Encontrándose el proceso en turno para fallo de segunda instancia, las partes radicaron ante este Tribunal acuerdo conciliatorio respecto de la sanción actualizada contenida en la Resolución sanción por devolución improcedente No. 0524120112000027 de marzo 6 de 2012, confirmada por la Resolución que resolvió el recurso No. 052362013000004 de marzo 14 de 2013, por concepto de IVA 2007 –bimestre 1, indicándose en el Acta No. 16 de 12 de septiembre de 2019 que el demandante aportó el recibo oficial de pago formulario No. 0490704688072 1 de junio 28 de 2019 por la suma de \$35.010.0000, y posteriormente canceló con el recibo oficial No. 0490704686736 2 del 06-09-2019 un valor de \$55.190.000, lo que de conformidad con la certificación correspondiente de la División de Gestión de Cobranzas cubre la totalidad de la sanción, actualización e intereses, en los términos del artículo 100 de la ley 1943 de 2019, dejándose como valor a conciliar el siguiente:

Valor a conciliar teniendo en cuenta el certificado expedido por la División de Gestión de Cobranzas o División de Gestión de Recaudo y Cobranzas según el caso	Sanción	\$8.812.000
	Intereses	-0-
	Actualización	\$7.335.000
VALOR TOTAL A CONCILIAR		\$16.147.000

Así las cosas, procede la Sala a revisar el acuerdo conciliatorio realizado entre los sujetos procesales de la referencia previas las siguientes,

CONSIDERACIONES.

COMPETENCIA

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 125 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- CPACA, las decisiones a que se refieren al numeral 4 del artículo 243 ibídem, la decisión de aprobación de acuerdo conciliatoria será adoptada en Sala, para ello se efectúan las siguientes:

MARCO NORMATIVO CONCILIACIÓN JUDICIAL

De conformidad con el art. 70 de la Ley 446 de 1998, pueden conciliar, total o parcialmente en las etapas prejudicial o judicial, las personas de derecho público, a través de sus representantes legales o por conducto de apoderado, sobre conflictos de carácter particular y contenido económico de que conozca o pueda conocer la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a través de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo. De otro lado, dicha conciliación prejudicial se constituye en requisito de procedibilidad para interponer las demandas con pretensiones contractuales, nulidad con restablecimiento del derecho y reparación directa como lo dispone el artículo 161 de la ley 1437 de 2011.

En cuanto a los aspectos sustanciales necesarios para aprobar un acuerdo judicial, el artículo 73 ibídem dispone:

*"Art. 73. Competencia. La Ley 23 de 1991 tendrá un artículo nuevo, así: Artículo 65 A. El auto que apruebe o impruebe el acuerdo conciliatorio corresponde a la Sala, Sección o Subsección de que forme parte el Magistrado que actúe como sustanciador; contra dicho auto procede recurso de apelación en los asuntos de doble instancia y de reposición en los de única.
(...)*

La autoridad judicial improbará el acuerdo conciliatorio cuando no se hayan presentado las pruebas necesarias para ello, sea violatorio de la ley o resulte lesivo para el patrimonio público" (negrilla y resaltado fuera de texto).

Además de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 446 de 1998, modificatorio del artículo 61 de la Ley 23 de 1991, no habrá conciliación cuando la correspondiente acción haya caducado.

Al respecto, ha sostenido el Consejo de Estado que:

*"... de acuerdo con lo anterior, los principales criterios que deben ser analizados para efectos de determinar la procedencia de la aprobación del acuerdo conciliatorio al que hayan llegado las entidades estatales, dentro o fuera de un proceso judicial, son: Que las partes estén debidamente representadas y que estos representantes tengan capacidad para conciliar. Que el acuerdo conciliatorio verse sobre acciones o derechos económicos disponibles por las partes. Que la acción no haya caducado. Que se hayan presentado las pruebas necesarias para soportar la conciliación, es decir, que respalden lo reconocido patrimonialmente en el acuerdo. Que el acuerdo no sea violatorio de la ley. Que el acuerdo no resulte lesivo para el patrimonio público"*¹.

En suma, de acuerdo a la jurisprudencia del Consejo de Estado y a las normas vigentes los requisitos necesarios para la aprobación del acuerdo conciliatorio son:

- Que verse sobre derechos económicos disponibles por las partes.
- Que las entidades estén debidamente representadas.
- Que los representantes o conciliadores tengan capacidad o facultad para conciliar y disponer de la materia objeto de convenio.
- Que no haya operado la caducidad de la acción.
- Que no resulte abiertamente inconveniente o lesivo para el patrimonio de la administración.
- Que los derechos reconocidos estén debidamente respaldados por las probanzas que se hubieren arrojado a la actuación, de acuerdo con el artículo 73 de la Ley 446 de 1998.

En consecuencia, para resolver sobre la aprobación o no del presente acuerdo, es preciso analizar el cumplimiento de dichos requisitos generales de la conciliación.

MARCO JURISPRUDENCIA EN CONCILIACION DE CARÁCTER TRIBUTARIO

No obstante lo anterior, se debe en el caso que ocupa verificar la posibilidad de la conciliación en materia tributaria, para lo cual encontramos la expedición de la Ley 1943 de 2018 *"Por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se dictan otras disposiciones."*², que en sus artículos 100 y 101

¹ Consejo de Estado. Sección Tercera. Consejero Ponente: Ramiro Saavedra Becerra. Auto de 26 de marzo de 2009, radicado No. 34233.

² Ley declarada INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-481-19 de 3 de octubre de 2019, Magistrado Ponente Dr. Alejandro Linares Cantillo. Dispone el Fallo:

"Tercero. DISPONER que (i) la declaratoria de inexequibilidad prevista en el resolutivo segundo surtirá efectos a partir del primero (1o.) de enero de dos mil veinte (2020), a fin de que el Congreso, dentro de la potestad de configuración que le es propia, expida el régimen que ratifique, derogue, modifique o subroge los contenidos de la Ley 1943 de 2018; (ii) los efectos del presente fallo sólo se producirán hacia el futuro y, en consecuencia, en ningún caso afectarán las situaciones jurídicas consolidadas de forma anterior a su notificación.

Cuarto. En caso de que para el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) no se hubiere promulgado y publicado una nueva ley, DISPONER la reviviscencia de manera simultánea de las normas derogadas o modificadas por la Ley 1943 de 2018, con el fin de que las normas reincorporadas rijan para el período fiscal que inicia el primero (1º) de enero de dos mil veinte (2020) y de allí en adelante."

facultan a la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN, para realizar conciliaciones en procesos contenciosos administrativos, en materia tributaria, aduanera y cambiaria, y para terminar por mutuo acuerdo los procesos administrativos en estas mismas materias, así:

"ARTÍCULO 100. CONCILIACIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA EN MATERIA TRIBUTARIA. Facúltase a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para realizar conciliaciones en procesos contenciosos administrativos, en materia tributaria, aduanera y cambiaria de acuerdo con los siguientes términos y condiciones:

Los contribuyentes, agentes de retención y responsables de los impuestos nacionales, los usuarios aduaneros y del régimen cambiario, que hayan presentado demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, podrán conciliar el valor de las sanciones e intereses según el caso, discutidos contra liquidaciones oficiales, mediante solicitud presentada ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), así:

Por el ochenta (80%) del valor total de las sanciones, intereses y actualización según el caso, cuando el proceso contra una liquidación oficial se encuentre en única o primera instancia ante un Juzgado Administrativo o Tribunal Administrativo, siempre y cuando el demandante pague el ciento por ciento (100%) del impuesto en discusión y el veinte por ciento (20%) del valor total de las sanciones, intereses y actualización.

Cuando el proceso contra una liquidación oficial tributaria, y aduanera, se halle en segunda instancia ante el Tribunal Contencioso Administrativo o Consejo de Estado según el caso, se podrá solicitar la conciliación por el setenta por ciento (70%) del valor total de las sanciones, intereses y actualización según el caso, siempre y cuando el demandante pague el ciento por ciento (100%) del impuesto en discusión y el treinta por ciento (30%) del valor total de las sanciones, intereses y actualización. Se entenderá que el proceso se encuentra en segunda instancia cuando ha sido admitido el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia.

Cuando el acto demandado se trate de una resolución o acto administrativo mediante el cual se imponga sanción dineraria de carácter tributario, aduanero o cambiario, en las que no hubiere impuestos o tributos a discutir, la conciliación operará respecto del cincuenta por ciento (50%) de las sanciones actualizadas, para lo cual el obligado deberá pagar en los plazos y términos de esta ley, el cincuenta por ciento (50%) restante de la sanción actualizada.

En el caso de actos administrativos que impongan sanciones por concepto de devoluciones o compensaciones improcedentes, la conciliación operará respecto del cincuenta por ciento (50%) de las sanciones actualizadas, siempre y cuando el contribuyente pague el cincuenta por ciento (50%) restante de la sanción actualizada y

reintegre las sumas devueltas o compensadas en exceso y sus respectivos intereses en los plazos y términos de esta ley.

Para efectos de la aplicación de este artículo, los contribuyentes, agentes de retención, declarantes, responsables y usuarios aduaneros o cambiarios, según se trate, deberán cumplir con los siguientes requisitos y condiciones:

1. Haber presentado la demanda antes de la entrada en vigencia de esta ley.
2. Que la demanda haya sido admitida antes de la presentación de la solicitud de conciliación ante la Administración.
3. Que no exista sentencia o decisión judicial en firme que le ponga fin al respectivo proceso judicial.
4. Adjuntar prueba del pago, de las obligaciones objeto de conciliación de acuerdo con lo indicado en los incisos anteriores.
5. Aportar prueba del pago de la liquidación privada del impuesto o tributo objeto de conciliación correspondiente al año gravable 2018, siempre que hubiere lugar al pago de dicho impuesto.
6. Que la solicitud de conciliación sea presentada ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) hasta el día 30 de septiembre de 2019.

El acta que dé lugar a la conciliación deberá suscribirse a más tardar el día 31 de octubre de 2019 y presentarse por cualquiera de las partes para su aprobación ante el juez administrativo o ante la respectiva corporación de lo contencioso administrativo, según el caso, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su suscripción, demostrando el cumplimiento de los requisitos legales. Las conciliaciones de que trata el presente artículo, deberán ser aceptadas por la autoridad judicial respectiva, dentro del término aquí mencionado.

La sentencia o auto que apruebe la conciliación prestará mérito ejecutivo de conformidad con lo señalado en los artículos 828 y 829 del Estatuto Tributario, y hará tránsito a cosa juzgada.

Lo no previsto en esta disposición se regulará conforme lo dispuesto en la Ley 446 de 1998 y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con excepción de las normas que le sean contrarias.

PARÁGRAFO 1o. La conciliación podrá ser solicitada por aquellos que tengan la calidad de deudores solidarios o garantes del obligado.

PARÁGRAFO 2o. No podrán acceder a los beneficios de que trata el presente artículo los deudores que hayan suscrito acuerdos de pago con fundamento en el artículo 7o de la Ley 1066 de 2006, el artículo 1o de la Ley 1175 de 2007, el artículo 48 de la Ley 1430 de 2010, los artículos 147, 148 y 149 de la Ley 1607 de 2012, los artículos 55, 56 y 57 de la Ley 1739 de 2014, y los artículos 305 y 306 de

la Ley 1819 de 2016, que a la entrada en vigencia de la presente ley se encuentren en mora por las obligaciones contenidas en los mismos.

PARÁGRAFO 3o. En materia aduanera, la conciliación prevista en este artículo no aplicará en relación con los actos de definición de la situación jurídica de las mercancías.

PARÁGRAFO 4o. Los procesos que se encuentren surtiendo el recurso de súplica o de revisión ante el Consejo de Estado no serán objeto de la conciliación prevista en este artículo.

PARÁGRAFO 5o. Facúltase a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para crear Comités de Conciliación Seccionales en las Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas Nacionales para el trámite y suscripción, si hay lugar a ello, de las solicitudes de conciliación de que trata el presente artículo, presentadas por los contribuyentes, usuarios aduaneros y/o cambiarios de su jurisdicción.

PARÁGRAFO 6o. Facúltase a los entes territoriales y a las corporaciones autónomas regionales para realizar conciliaciones en procesos contenciosos administrativos en materia tributaria de acuerdo con su competencia.

PARÁGRAFO 7o. El término previsto en el presente artículo no aplicará para los contribuyentes que se encuentren en liquidación forzosa administrativa ante una Superintendencia, o en liquidación judicial los cuales podrán acogerse a esta facilidad por el término que dure la liquidación.

PARÁGRAFO 8o. El Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) podrá conciliar las sanciones e intereses derivados de los procesos administrativos, discutidos con ocasión de la expedición de los actos proferidos en el proceso de determinación o sancionatorio, en los mismos términos señalados en esta disposición.

Esta disposición no será aplicable a los intereses generados con ocasión a la determinación de los aportes del Sistema General de Pensiones, para lo cual los aportantes deberán acreditar el pago del 100% de los mismos o del cálculo actuarial cuando sea el caso.

Contra la decisión del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) procederá únicamente el recurso de reposición en los términos del artículo 74 y siguientes del Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011

ARTÍCULO 101. TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTARIOS, ADUANEROS Y CAMBIARIOS. Facúltase a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para terminar por mutuo acuerdo los procesos

administrativos, en materia tributaria, aduanera y cambiaria, de acuerdo con los siguientes términos y condiciones:

Los contribuyentes, agentes de retención y responsables de los impuestos nacionales, los usuarios aduaneros y del régimen cambiario a quienes se les haya notificado antes de la entrada en vigencia de esta ley, requerimiento especial, liquidación oficial, resolución del recursos de reconsideración, podrán transar con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), hasta el 31 de octubre de 2019, quien tendrá hasta el 17 de diciembre de 2019 para resolver dicha solicitud, el ochenta por ciento (80%) de las sanciones actualizadas, intereses, según el caso, siempre y cuando el contribuyente o responsable, agente retenedor o usuario aduanero, corrija su declaración privada, pague el ciento por ciento (100%) del impuesto o tributo a cargo, o del menor saldo a favor propuesto o liquidado, y el veinte por ciento (20%) restante de las sanciones e intereses.

Cuando se trate de pliegos de cargos y resoluciones mediante las cuales se impongan sanciones dinerarias, en las que no hubiere impuestos o tributos aduaneros en discusión, la transacción operará respecto del cincuenta por ciento (50%) de las sanciones actualizadas, para lo cual el obligado deberá pagar en los plazos y términos de esta ley, el cincuenta por ciento (50%) restante de la sanción actualizada.

En el caso de las resoluciones que imponen sanción por no declarar, y las resoluciones que fallan los respectivos recursos, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) podrá transar el setenta por ciento (70%) del valor de la sanción e intereses, siempre y cuando el contribuyente presente la declaración correspondiente al impuesto o tributo objeto de la sanción y pague el ciento por ciento (100%) de la totalidad del impuesto o tributo a cargo y el treinta por ciento (30%) de las sanciones e intereses. Para tales efectos los contribuyentes, agentes de retención, responsables y usuarios aduaneros deberán adjuntar la prueba del pago de la liquidación(es) privada(s) del impuesto objeto de la transacción correspondiente al año gravable 2018, siempre que hubiere lugar al pago de la liquidación privada de los impuestos y retenciones correspondientes al periodo materia de discusión.

En el caso de actos administrativos que impongan sanciones por concepto de devoluciones o compensaciones improcedentes, la transacción operará respecto del cincuenta por ciento (50%) de las sanciones actualizadas, siempre y cuando el contribuyente pague el cincuenta por ciento (50%) restante de la sanción actualizada y reintegre las sumas devueltas o compensadas en exceso y sus respectivos intereses en los plazos y términos de esta ley.

El acta que aprueba la terminación por mutuo acuerdo pone fin a la actuación administrativa tributaria, aduanera o cambiaria, adelantada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), y con la misma se entenderán extinguidas las obligaciones

contenidas en el acto administrativo objeto de transacción. La solicitud de terminación por mutuo acuerdo no suspende los procesos administrativos de determinación de obligaciones ni los sancionatorios y, en consecuencia, los actos administrativos expedidos con posterioridad al acto administrativo transado quedarán sin efectos con la suscripción del acta que aprueba la terminación por mutuo acuerdo.

La terminación por mutuo acuerdo que pone fin a la actuación administrativa tributaria, aduanera o cambiaria, prestará mérito ejecutivo de conformidad con lo señalado en los artículos 828 y 829 del Estatuto Tributario.

Los términos de corrección previstos en los artículos 588, 709 y 713 del Estatuto Tributario, se extenderán temporalmente con el fin de permitir la adecuada aplicación de esta disposición.

PARÁGRAFO 1o. La terminación por mutuo acuerdo podrá ser solicitada por aquellos que tengan la calidad de deudores solidarios o garantes del obligado.

PARÁGRAFO 2o. No podrán acceder a los beneficios de que trata el presente artículo los deudores que hayan suscrito acuerdos de pago con fundamento en el artículo 7o de la Ley 1066 de 2006, el artículo 1o de la Ley 1175 de 2007, el artículo 48 de la Ley 1430 de 2010, los artículos 147, 148 y 149 de la Ley 1607 de 2012, los artículos 55, 56 y 57 de la Ley 1739 de 2014, y los artículos 305 y 306 de la Ley 1819 de 2016, que a la entrada en vigencia de la presente ley se encuentren en mora por las obligaciones contenidas en los mismos.

PARÁGRAFO 3o. En materia aduanera, la transacción prevista en este artículo no aplicará en relación con los actos de definición de la situación jurídica de las mercancías.

PARÁGRAFO 4o. Facúltase a los entes territoriales y a las corporaciones autónomas regionales para realizar las terminaciones por mutuo acuerdo de los procesos administrativos tributarios, de acuerdo con su competencia.

PARÁGRAFO 5o. En los casos en los que el contribuyente pague valores adicionales a los que disponen en la presente norma, se considerará un pago de lo debido y no habrá lugar a devoluciones.

PARÁGRAFO 6o. El término previsto en el presente artículo no aplicará para los contribuyentes que se encuentren en liquidación forzosa administrativa ante una Superintendencia, o en liquidación judicial los cuales podrán acogerse a esta facilidad por el término que dure la liquidación.

PARÁGRAFO 7o. Las solicitudes de terminación por mutuo acuerdo, no serán rechazadas por motivo de firmeza del acto administrativo o por caducidad del término para presentar la demanda ante la

jurisdicción contencioso administrativa, siempre y cuando el vencimiento del respectivo término ocurra con posterioridad a la presentación de la solicitud de terminación por mutuo acuerdo y que, a más tardar, el 31 de octubre de 2019, se cumplan los demás requisitos establecidos en la ley. La solicitud de terminación por mutuo acuerdo no suspende los términos legales para la firmeza de los actos administrativos, ni los de caducidad para acudir a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

PARÁGRAFO 8o. Si a la fecha de publicación de esta ley, o con posterioridad se ha presentado o se presenta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la liquidación oficial, la resolución que impone sanción o la resolución que decide el recurso de reconsideración contra dichos actos, podrá solicitarse la terminación por mutuo acuerdo, siempre que la demanda no haya sido admitida y a más tardar el 31 de octubre de 2019 se acredite los requisitos señalados en este artículo y se presente la solicitud de retiro de la demanda ante el juez competente, en los términos establecidos en el artículo 174 de la Ley 1437 de 2011.

PARÁGRAFO 9o. La reducción de intereses y sanciones tributarias a que hace referencia este artículo, podrá aplicarse únicamente respecto de los pagos realizados desde la fecha de publicación de esta ley.

PARÁGRAFO 10. El acto susceptible de ser transado será el último notificado a la fecha de presentación de la solicitud de terminación por mutuo acuerdo.

PARÁGRAFO 11. El Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) podrá transar las sanciones e intereses derivados de los procesos administrativos de determinación o sancionatorios de su competencia, en los mismos términos señalados en esta disposición.

Esta disposición no será aplicable a los intereses generados con ocasión a la determinación de los aportes del Sistema General de Pensiones, para lo cual los aportantes deberán acreditar el pago del 100% de los mismos o del cálculo actuarial cuando sea el caso.

El Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) decidirá las solicitudes de terminación por mutuo acuerdo una vez culmine la verificación de los pagos respectivos y contra dicha decisión procederá únicamente el recurso de reposición en los términos del artículo 74 y siguientes del Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011."

Igualmente se expidió el Decreto 872 del 20 de mayo de 2019, que reglamentó los artículos 100, 101 y 102 de la Ley 1943 de 2018, sustituyó el título 4 de la parte 6 del libro 1 y adicionó el capítulo 8, título 2 de la parte 6 del libro 1 del Decreto 1625 de 2016 único Reglamentario en Materia Tributaria.

CASO CONCRETO

PRESUPUESTO DE LA CONCILIACIÓN JUDICIAL:

Atendiendo las normas antes transcritas, esta Corporación deberá estudiar la aprobación del acuerdo conciliatorio atendiendo cada uno de los parámetros que regula la conciliación establecida en la Ley 446 de 1998, modificatorio del artículo 61 de la Ley 23 de 1991, al igual que los requisitos establecidos en la Ley 1943 de 2018 y el Decreto 872 del 20 de mayo de 2019, que adoptó la conciliación contenciosa administrativa y la terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos en materia tributaria, aduanera y cambiaria para la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN.

El acuerdo versa sobre derechos económicos disponibles. La pretensión versa sobre la sanción impuesta por devolución y/o compensación improcedente emanada de la declaración del impuesto a las ventas del primer periodo del año 2007, es decir, que no se está disponiendo sobre el tributo, ítem que no es posible conciliar.

Capacidad y representación de las partes: Los convocantes ostentan la capacidad jurídica para comparecer al proceso, además los apoderados judiciales contaban con el poder que les faculta para conciliar, tal como consta a folios 1 (parte demandante) y 137 (DIAN).

Caducidad: Atendiendo lo señalado en el literal d) del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, no existe caducidad para presentar la demanda, en este caso, el medio de control instaurado consagrado en el artículo 138 CPACA, que busca la nulidad de las Resoluciones Nos. 052412012000027 del 6 de marzo de 2012, que le impuso sanción por devolución y/o compensación improcedente emanada del impuesto a las ventas del primer periodo del año gravable 2007, y la No. 052362013000004 del 14 de marzo de 2013, que resuelve el recurso de reconsideración confirmando la sanción, debió ser presentada a más tardar el 22 de julio de 2013, de acuerdo a la fecha de notificación, término que fue respetado por el demandante quien acudió ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo el 28 de junio de 2013 (fl. 122), es decir, dentro del término legal, por tanto, encontramos que la acción no se encuentra afectada de caducidad.

Que el acuerdo conciliatorio cuente con las pruebas necesarias, no sea violatorio de la ley o no resulte lesivo para el patrimonio público.

La Ley 1943 de 2018 y el Decreto 872 de 2019, que adoptó la conciliación contenciosa administrativa y la terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos en materia tributaria, aduanera y cambiaria para la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN, estableció los siguientes requisitos para la procedencia de la fórmula conciliatoria presentada por las partes:

1. **Que la demanda haya sido presentada con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1943 de 2019 (28 de diciembre de 2018).** La demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho contra las

Resoluciones Nos. 052412012000027 del 6 de marzo de 2012, que le impuso sanción por devolución y/o compensación improcedente emanada del impuesto a las ventas del primer periodo del año gravable 2007, y la No. 052362013000004 del 14 de marzo de 2013, que resuelve el recurso de reconsideración confirmando la sanción fue radicada ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo el 28 de junio de 2013 (fl. 122), por lo cual la exigencia se encuentra satisfecha.

2. **Que la demanda haya sido admitida antes de la presentación de la solicitud de conciliación ante la Administración.** La solicitud fue radicada el día 22 de agosto de 2019, bajo el número 017888; el memorial se acompañó de la totalidad de los requisitos de Ley (fl.265-297), la demanda fue admitida mediante Auto 087 del 15 de agosto de 2013, (fl.123-124) es decir, con anterioridad a la solicitud de conciliación ante la DIAN, como uno de los presupuestos de ley para acceder al beneficio.
3. **Que no exista sentencia o decisión judicial en firme que le ponga fin al respectivo proceso judicial. Estado del proceso:** El proceso se encuentra en trámite de segunda instancia, es decir, aún no se ha dictado sentencia definitiva, por lo tanto, se encuentra cumplido este requisito para la procedencia de la conciliación.
4. **Adjuntar prueba del pago, de las obligaciones objeto de conciliación de acuerdo con lo indicado en los incisos anteriores.** El demandante aportó el recibo oficial de pago formulario No. 0490704688072 1 de junio 28 de 2019 por la suma de \$35'010.000, y posteriormente canceló con el recibo oficial 0490704686736 2 del 06-09-2019 un valor de \$55'190.000, lo que según indica la DIAN en el Acta y lo probado en el plenario, cubre el reintegro de las sumas devueltas en exceso \$38'566.00, la sanción (intereses moratorios incrementados) \$8'812.000, actualización \$7'335.000 e intereses de mora \$35'487.000, en los términos del inciso 6º del artículo 100 de la ley 1943 de 2019, conforme con la certificación expedida por la División de Gestión de Cobranzas, la cual se aportó. (Fls. 275 y 317 a 320)
5. **Aportar prueba del pago de la liquidación privada del impuesto o tributo objeto de conciliación correspondiente al año gravable 2018, siempre que hubiere lugar al pago de dicho impuesto.** Se presentó la declaración de IVA 2018-1, formulario 3003614660876 el 16 de marzo de 2018 con saldo a favor. (fl. 282)
6. **Que la solicitud de conciliación sea presentada ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) hasta el día 30 de septiembre de 2019.** La solicitud se presentó el 22 de agosto de 2019 (fl. 265-274), se cumple con esta exigencia.
7. **Verificar que si se suscribieron acuerdos de pago con fundamento en los artículos 7o de la Ley 1066 de 2006, 1o de la Ley 1175 de 2007, 48 de la Ley 1430 de 2010, 147, 148 y 149 de la Ley 1607 de 2012, 55, 56 y 57 de la Ley 1739 de 2014, y 305 y 306 de la Ley 1819 de 2016, que a la entrada en vigencia de la presente ley no se encuentren en mora**

por las obligaciones contenidas en los mismos. De acuerdo con la certificación expedida por la División de Gestión de Cobranzas, al 28 de diciembre de 2018 no se encontraba en mora por acuerdos de pago.

- 8. Que no se trate de un acto de definición de la situación jurídica de las mercancías.** Los actos demandados versan sobre una sanción por devolución y/o compensación improcedente emanada del impuesto a las ventas del primer periodo del año gravable 2007 y no define la situación jurídica de las mercancías.

CONCLUSION

Revisado lo anterior, la Sala concluye que la fórmula conciliatoria presentada por las partes ante esta instancia, reúne los requisitos previstos en la Ley 1943 de 2018 y el Decreto 872 de 2019, que adoptó la conciliación contenciosa administrativa y la terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos en materia tributaria, aduanera y cambiaria para la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN. Por tanto, se imparte su aprobación y se dará por terminado el proceso.

En mérito de lo expuesto el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,

RESUELVE:


PRIMERO: APRUÉBESE el acuerdo conciliatorio suscrito por POLLOS BUCANERO S.A. y U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN, en relación con las Resoluciones Nos. 052412012000027 del 6 de marzo de 2012 y 052362013000004 del 14 de marzo de 2013, por las cuales se le sanciona por devolución y/o compensación improcedente emanada del impuesto a las ventas del primer periodo del año gravable 2007.


SEGUNDO: DÉSE por terminado el proceso.


NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Providenciada discutida y aprobada en Sala de decisión de la fecha. Acta No. 7.

LOS MAGISTRADOS,


EDUARDO ANTONIO LUBO BARROS


OSCAR SILVIO NARVÁEZ DAZA


OMAR EDGAR BORJA SOTO